Reporte sobre la Magistratura en el Mundo

(Reserva de Derechos: 04-2011-102610220300-102)*

OEA (Corte IDH):

- **Actualización de los Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte IDH nos. 1 y 6, Pena de muerte y Desaparición Forzada de personas.** La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene el agrado de comunicar la actualización, a mayo de 2025, de los siguientes Cuadernillos de Jurisprudencia:
 - Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N°1: Pena de muerte [aquí](#).
 - Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N°6: Desaparición Forzada de personas [aquí](#).La Serie “Cuadernillos de Jurisprudencia” es una sistematización de las decisiones de la Corte Interamericana. Su objeto es dar a conocer las principales líneas jurisprudenciales del Tribunal en diversos temas de relevancia e interés regional de manera accesible. Se pueden encontrar todos los cuadernillos de jurisprudencia [aquí](#). Estas publicaciones se elaboraron gracias al generoso aporte de la cooperación del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), implementada por GIZ y su Programa DIRAJus basado en Costa Rica.

Estados Unidos (Diario Constitucional):

- **Juez valida demanda contra Meta y TikTok por reto viral que causó la muerte de joven.** Un juez de la Corte Suprema de Nueva York (Estados Unidos) resolvió acoger la mayoría de las reclamaciones formuladas en la demanda que una mujer interpuso contra Meta y ByteDance (empresa propietaria de TikTok). La acción judicial alega que dichas empresas incurrieron en responsabilidad civil por la supuesta promoción algorítmica de contenidos que incitan al «surf en el metro» (subway surfing), reto viral en redes sociales que habría provocado el fallecimiento de su hijo, que consiste en caminar sobre el metro de Nueva York cuando está movimiento. En su resolución, el magistrado rechazó las mociones de desestimación presentadas por las demandadas, en las que invocaban protecciones bajo la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones y la Primera Enmienda de la Constitución de los EE. UU. El juez consideró que, en esta etapa preliminar, existen fundamentos suficientes para sostener que las plataformas proporcionaron deliberadamente dicho contenido a un menor de edad, sin que mediara una solicitud expresa por parte del usuario. El juez distinguió este caso de otros precedentes en los que se determinó que los algoritmos actuaban de manera neutral respecto al contenido. En cambio, señaló que aquí se plantea plausiblemente que la actuación de las plataformas excedió el rol de intermediario neutral, configurando una participación activa en la selección de usuarios particularmente vulnerables al tipo de contenido difundido. La parte actora no solicitó la eliminación del contenido de surf en el metro, sino que exige responsabilidades por el diseño de sistemas algorítmicos que, presuntamente, promueven material perjudicial entre adolescentes. Asimismo, la demanda alega que las plataformas incumplieron su deber de advertencia sobre los posibles daños derivados del uso de sus servicios. En paralelo, el juez desestimó las acciones legales contra la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), al considerar que la víctima tenía conocimiento de los riesgos evidentes asociados al comportamiento que desencadenó el accidente fatal. La etapa de descubrimiento permitirá esclarecer si las empresas demandadas dirigieron activamente los contenidos al joven o si este accedió voluntariamente a los mismos, lo que podría afectar la viabilidad de las reclamaciones basadas en la Sección 230. Parte de las pretensiones, como las relativas al enriquecimiento injusto, ya han sido descartadas.

TEDH (Diario Constitucional):

- **TEDH avala condenas de activistas sancionados por extraer retratos del presidente de Francia en ayuntamientos.** El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimó las demandas deducidas

contra Francia por las condenas dictadas contra activistas ecologistas sancionados por descolgar y robar retratos del Presidente de la República en varios ayuntamientos del país. No constató ninguna violación del artículo 10 (libertad de expresión) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al estimar que las condenas fueron proporcionadas y ajustadas a derecho. Un grupo de ciudadanos franceses y un ciudadano belga, miembros un colectivo, participaron en acciones de protesta consistentes en la sustracción de retratos oficiales del presidente de la República en varios ayuntamientos. Las acciones, realizadas de forma pública y difundidas en medios y redes sociales, dieron lugar a investigaciones penales y posteriores condenas por el delito de robo en grupo. Los tribunales impusieron sanciones que oscilaron entre 200 y 500 euros. Los demandantes interpusieron recursos para impugnar las sanciones, alegando una vulneración de su libertad de expresión conforme al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tras la desestimación de los recursos, los activistas demandaron al Estado el TEDH. Las jurisdicciones nacionales consideraron que sus acciones no estaban amparadas por la libertad de expresión, por configurar delitos según la legislación penal francesa. En su análisis de fondo, el Tribunal observa que, "(...) los tribunales basaron sus condenas, por un lado, en la comisión del robo del retrato del presidente de la República en grupo y la no restitución de este, y por otro, en el daño causado a un bien «en un lugar público con valor simbólico». Invocaron así la circunstancia del grupo materialmente constituida, ya que los hechos fueron cometidos por varias personas entre las que se encontraban los acusados, o bien que los hechos no constituyen únicamente un descolgamiento irregular del retrato presidencial, sino la sustracción fraudulenta del mismo constitutiva del delito de robo con la agravante de grupo". Agrega que, "(...) las jurisdicciones internas pudieron tomar en cuenta válidamente el alcance simbólico de las acciones controvertidas, tanto para establecer la existencia de un vínculo entre los actos incriminados y el ejercicio de la libertad de expresión sobre un tema de interés general, como para valorar el verdadero alcance de los descolgamientos realizados, más allá del escaso valor material de los bienes sustraídos. Cabe señalar, además, que en una decisión posterior a estos casos, tal consideración de la «valor simbólico del retrato» descolgado, entre otros criterios establecidos por su jurisprudencia, llevó a la Corte de Casación a adoptar una solución diferente confirmando la absolución de los acusados". Comprueba que, "(...) el enfoque militante de los demandantes se basó en la comisión deliberada de una infracción de derecho común y que, en consecuencia, la apertura de procesos judiciales y los actos posteriores de investigación denunciados deben considerarse, en los presentes casos, no como un efecto disuasorio de la expresión de su mensaje, sino más bien como parte integrante de su estrategia de comunicación. En estas condiciones, tras haber señalado el cuidado con que las jurisdicciones internas evaluaron la proporcionalidad a la luz del artículo 10 del Convenio y habiendo observado la evolución posterior de la jurisprudencia de la Corte de Casación, no se ve ninguna razón de peso para apartarse de su apreciación". El Tribunal concluye que, "(...) en lo que respecta a la naturaleza y la severidad de las penas impuestas, este Tribunal considera que las jurisdicciones internas optaron por penas particularmente moderadas, guiadas por la preocupación de tener en cuenta la naturaleza y el contexto de los actos en cuestión. Teniendo en cuenta tanto el bajo importe de las multas impuestas como la suspensión de estas penas, el Tribunal opina que las condenas impuestas a los demandantes, que se cuentan entre las sanciones más moderadas posibles, no eran desproporcionadas respecto al objetivo legítimo perseguido. Constatando la evolución de la jurisprudencia de los jueces penales internos, se concluye que las autoridades nacionales no sobrepasaron el margen de apreciación del que goza el Estado demandado". En mérito de lo expuesto, el Tribunal desestimó las demandas en todas sus partes.

República Checa (RPI):

- **La Suprema Corte propone cambiar la ley para permitir indemnización millonaria por efectos adversos de la vacuna del Covid.** El Tribunal Supremo de Chequia ha solicitado al Tribunal Constitucional la modificación de una parte clave de la ley de indemnización por daños derivados de la vacunación contra el COVID-19. El caso se centra en un hombre que, tras recibir la tercera dosis en enero de 2022, desarrolló una miocarditis, inflamación del músculo cardíaco, y reclama una compensación de más de 320.000 euros. El Ministerio de Salud rechazó su solicitud, y el Tribunal Municipal de Praga también desestimó la demanda, alegando que el daño no alcanzaba el umbral legal de "lesión especialmente grave". Sin embargo, el Tribunal Supremo considera esta formulación inconstitucional, ya que impide que los tribunales evalúen cada caso de forma individual y justa. Por lo tanto, la propuesta busca eliminar esa restricción y permitir que los jueces valoren el sufrimiento y las secuelas sociales de cada paciente. No obstante, el gobierno de Petr Fiala se opone a la reforma, mientras que los ministerios de Salud y Justicia han recomendado que el Ejecutivo intervenga en el proceso constitucional para bloquear el cambio legislativo. Desde el inicio de la vacunación contra el COVID-19, unas 145 personas

han solicitado compensación por efectos adversos. Ninguna ha recibido indemnización hasta ahora, salvo un caso relacionado con la muerte de un niño tras una vacuna obligatoria.

India (Diario Constitucional):

- **Nueva política de cuotas en la Suprema Corte.** En un hecho sin precedentes, la Corte Suprema de la India ha implementado por primera vez una política de reservas internas destinada a promover la inclusión de personas pertenecientes a las castas y tribus históricamente marginadas del país. La medida entró en vigor el 23 de junio de 2025, el tribunal aplicará cuotas para Scheduled Castes (SC) y Scheduled Tribes (ST) en una amplia gama de cargos administrativos no jurisdiccionales. La decisión fue adoptada bajo el liderazgo del juez presidente Bhushan Ramkrishna Gavai, el segundo magistrado dalit en encabezar la institución, y representa un giro significativo en la tradición institucional del poder judicial indio, que hasta ahora había estado exento de este tipo de medidas afirmativas. **¿Qué implica esta reserva?** La circular del 27 de junio de 2025 (corresponde a la fecha en que la circular interna fue firmada y distribuida oficialmente) implementa un sistema de reservas del 15% para castas registradas (Scheduled Castes) y 7,5% para tribus registradas (Scheduled Tribes) en la contratación directa y promociones internas del personal administrativo de la Corte Suprema. Se aplicará a cargos no judiciales como: Registradores y oficiales de secretaría, Asistentes judiciales, Bibliotecarios, Personal auxiliar y de mantenimiento. Este es el primer paso hacia una estructura administrativa más inclusiva, en un entorno donde históricamente los puestos de poder han sido ocupados por castas dominantes. **Liderazgo del juez Bhushan Gavai.** El actual Presidente del Tribunal Supremo, Bhushan Gavai, es solo el segundo juez dalit en llegar a la máxima magistratura de la India. Su papel fue clave, no solo por su figura simbólica, sino también porque impulsó activamente la medida. Durante su mandato, Gavai enfatizó la necesidad de que la Corte «refleje en su estructura interna los principios que proclama en sus fallos». **El contexto de las cuotas en India.** India cuenta desde hace décadas con políticas de acción afirmativa (reservas) para SC/ST y OBC (otras castas rezagadas) en educación, empleo público y representación política. Sin embargo, el Poder Judicial se había mantenido al margen, alegando autonomía institucional. Con esta decisión, la Corte Suprema se alinea por primera vez con el resto de instituciones estatales. **Reacciones públicas.** Organizaciones como la Dalit Rights Movement y académicos de derecho constitucional han celebrado la medida, aunque con reservas. Consideran que, aunque positiva, es insuficiente si no se extiende al proceso de nombramiento de jueces y al Consejo Judicial. Por otro lado, sectores más conservadores han expresado preocupación por la posible «politización» del aparato judicial, aunque la Corte aclaró que la reserva se aplicará solo en procesos administrativos y seguirá criterios constitucionales. **Modelo replicable.** Esta política podría abrir el camino para que altas cortes de justicia estatales adopten medidas similares. Algunos tribunales como el de Tamil Nadu y Andhra Pradesh ya cuentan con prácticas informales de diversidad, pero no sistemáticas.

De nuestros archivos:

**31 de marzo de 2014
Israel (El Universal)**

- **Condenan por corrupción al ex primer ministro Ehud Olmert.** El tribunal del distrito de Tel Aviv condenó al ex primer ministro Ehud Olmert en un nuevo caso de corrupción, que puede poner fin a su carrera política, indicaron los medios este lunes. Se trata de la primera vez que un ex jefe de gobierno es condenado por soborno, en lo que ha sido llamado uno de los peores casos de escándalos de corrupción en la historia de Israel, informó AFP. Ehud Olmert escuchó impasible la lectura del veredicto que lo condena por soborno en un escándalo inmobiliario y falsificación de testimonio. Olmert fue hallado culpable de haber recibido sobornos en dos casos separados, uno de los cuales estaba vinculado a la construcción en Jerusalén de un enorme complejo residencial llamado Holyland, cuando era alcalde de esa ciudad (1993-2003). En 2010, Olmert fue designado como un sospechoso clave en el llamado caso Holyland, bajo la sospecha de que había recibido sobornos por un total de aproximadamente 1,5 millones de shekels (430.000 dólares, 312.000 euros), aunque la fiscalía redujo más tarde la suma recibida a la mitad. Ehud Olmert, 68 años, uno de los políticos de más experiencia de Israel, fue alcalde de Jerusalén, varias veces ministros y de 2006 a 2008 primer ministro. Olmert renunció en septiembre de 2008, después de que la policía recomendara su imputación en varios casos de corrupción. Aunque implicado en varios casos de corrupción, Olmert había sido condenado una sola vez, a una leve pena de cárcel en suspenso, en septiembre de 2012, por abuso de confianza. La justicia lo había condenado por favoritismo hacia un

ex socio cuando era ministro de Comercio e Industria (2003-2006), pero lo había absuelto en otras dos causas de corrupción. La clemencia de la justicia había desatado las especulaciones sobre un posible retorno de Olmert a la arena política, pero la condena en el caso de corrupción de Holyland, el más grave en la historia de Israel, parece echar por tierra esa hipótesis. "Hablamos de un hombre que ya fue condenado", indicó el comentarista judicial de la radio pública Moshe Hanegbi. "En esas circunstancias, no veo como la fiscalía podría abstenerse de solicitar una pena de cárcel", agregó. El juez David Rosen habló de un caso "de corrupción y de prácticas obscenas" y denunció un "sistema político corrupto que se pudrió con el paso de los años". Ehud Olmert también fue condenado por haberle mentado a la corte para "desprestigiar a un testigo de la acusación", agregó el juez. Olmert se convirtió en primer ministro en 2006, en reemplazo de Ariel Sharon, víctima de un ataque cerebral. En julio del 2008, debilitado por las acusaciones de corrupción, renunció a competir en las elecciones primarias de Kdamia, el partido centrista que había fundado con Sharon.

Elaboración: Dr. Alejandro Anaya Huertas

* *El presente Reporte se integra por notas publicadas en diversos medios noticiosos del ámbito internacional, el cual es presentado por la SCJN como un servicio informativo para la comunidad jurídica y público interesado, sin que constituya un criterio oficial para la resolución de los asuntos que se someten a su consideración y sin que asuma responsabilidad alguna sobre su contenido.*